



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. reservada*
19 de agosto de 2010
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

99º período de sesiones

12 a 30 de julio de 2010

Dictamen

Comunicación N° 1502/2006

<i>Presentada por:</i>	Mikhail Marinich (no representado por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Belarús
<i>Fecha de la comunicación:</i>	15 de mayo de 2006 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo a los artículos 92 y 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 31 de octubre de 2006 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	16 de julio de 2010
<i>Asunto:</i>	Condena de un dirigente de la oposición unida a un juicio sin las debidas garantías procesales, detención ilegal, condiciones de reclusión inhumanas y presunta violación de su derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Sin fundamentación
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Derecho a un juicio justo, derecho al acceso inmediato a un abogado, medida restrictiva ilegal, derecho a ser informado sin demora de la acusación, tratos inhumanos y condiciones de reclusión deficientes, presunción de inocencia

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Artículos del Pacto: 7; 9; 10, párrafo 1; 14, párrafos 1, 2 y 3 a) y b);
15; 17; 19 y 22

Artículo del Protocolo

Facultativo: 2

El 16 de julio de 2010 el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación N° 1502/2006

[Anexo]

Anexo

Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (99º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación N° 1502/2006**

<i>Presentada por:</i>	Mikhail Marinich (no representado por abogado)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Belarús
<i>Fecha de la comunicación:</i>	15 de mayo de 2006 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 16 de julio de 2010,

Habiendo concluido el examen de la comunicación N° 1502/2006, presentada al Comité de Derechos Humanos por el Sr. Mikhail Marinich, con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo

1. El autor de la comunicación es el Sr. Mikhail Marinich, nacido en 1940, ciudadano de Belarús y ex candidato a la Presidencia, que alega ser víctima de violaciones por el Estado parte de los artículos 7, 9, 10, 14, 15, 17, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 30 de diciembre de 1992. El autor no está representado.

** En el examen de la presente comunicación participaron los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Lazhari Bouzid, Sr. Mahjoub El Haiba, Sr. Ahmad Amin Fathalla, Sr. Yuji Iwasawa, Sra. Helen Keller, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sra. Iulia Antoanella Motoc, Sr. Michael O'Flaherty, Sr. José Luis Pérez Sánchez-Cerro, Sr. Rafael Rivas Posada, Sr. Fabian Omar Salvioli y Sr. Krister Thelin.

Los hechos expuestos por el autor

2.1 El autor, un antiguo alto cargo del Estado¹, fue candidato en las elecciones presidenciales de Belarús en 2001. Tras obtener resultados insatisfactorios en las elecciones, pasó a ser dirigente de la Asociación Bielorrusa de Iniciativa Empresarial (BABI). Publicó varios artículos e intervino como ponente en conferencias sobre la reforma económica en las que formuló opiniones distintas a las del Gobierno, lo que dio lugar a que el Estado persiguiera a miembros de la BABI.

2.2 El autor alega que desde 2002 estuvo sometido a una vigilancia estrecha. Le intervinieron el teléfono, siguieron a su automóvil y no obtuvo autorización para abrir sucursales regionales de la BABI. Tras la publicación de uno de sus artículos en un periódico nacional, se le imputaron acusaciones de haber cometido infracciones administrativas. Además, las oficinas de la BABI fueron cerradas en varias ocasiones, por lo que se vieron obligados a cambiar su emplazamiento. A principios de 2004, la organización alquiló un apartamento en la ciudad de Minsk. Mientras que el autor se encontraba en viaje de negocios en los Estados Unidos de América, las autoridades obligaron al propietario del apartamento a que rescindiera el contrato de arrendamiento del local a la BABI, lo que les obligó a trasladarse y a llevar a un garaje el equipo de la organización, parte del cual se lo había facilitado la Embajada de los Estados Unidos de América, hasta poder alquilar un nuevo local.

Detención

2.3 El 24 de abril de 2004, la policía de tráfico detuvo al autor, que iba conduciendo, por exceso de velocidad y conducción en estado de embriaguez, hecho que el autor negó. Poco después, funcionarios del KGB llegaron y registraron sus pertenencias sin disponer de una orden de registro. Durante el registro, los funcionarios del KGB se incautaron de un maletín con 91.000 dólares de los Estados Unidos sin seguir protocolo alguno respecto de la incautación. Aproximadamente a las 8 de la tarde, el autor fue llevado a las oficinas del KGB sin que mediara orden de la fiscalía ni de ningún otro organismo. El autor alega que no se le permitió llamar a sus familiares ni ponerse en contacto con un abogado.

2.4 El autor fue interrogado durante la noche sin asistencia letrada. El interrogatorio fue presuntamente grabado por una cámara oculta. Posteriormente, partes del interrogatorio se mostraron en la televisión de Belarús con comentarios falsos y denigrantes sobre el autor. Éste alega que la televisión de Belarús emitió la información distorsionada aun antes de que concluyera la investigación.

2.5 A primera hora de la mañana del 25 de abril de 2004, el autor fue puesto en libertad, si bien se le ordenó que volviera el 26 de abril de 2004 a las 3 de la tarde para reunirse con funcionarios del KGB. No se le facilitó ninguna documentación procedimental relacionada con su detención. En el siguiente interrogatorio, que también tuvo lugar sin la presencia de un abogado, se informó al autor de que parte del dinero (41.900 dólares) que le habían confiscado era falso. No se le proporcionaron los resultados del examen de los expertos que llegaron a esa conclusión ni se le dio explicación alguna de la razón por la que se había solicitado ese examen. Así pues, el autor se convirtió en testigo de un delito de fabricación y distribución de moneda extranjera falsa.

2.6 El 26 de abril de 2004, los investigadores registraron su casa de verano y se incautaron de un arma de fuego y de documentación personal. El autor afirma que su casa fue allanada, ya que las ventanas estaban rotas y sus pertenencias esparcidas. También afirma que sus huellas no estaban en el arma de fuego. Durante el registro no se hicieron

¹ Desempeñó los cargos de alcalde de Minsk, diputado del Parlamento, Ministro de Relaciones Económicas Exteriores y Embajador de Belarús en varios países europeos.

grabaciones de vídeo ni fotografías. En el informe sobre el registro no se decía nada acerca de la ventana rota ni de otros indicios de allanamiento. Se incautaron de sus documentos personales en contravención del Código de Procedimiento Penal. El autor afirma que el registro de su casa fue ilegal, ya que se llevó a cabo en relación con una causa penal por falsificación de moneda extranjera en la que él figuraba únicamente como testigo.

Inicio de actuaciones penales

2.7 El 27 de abril de 2004, se iniciaron actuaciones penales contra el autor en virtud del párrafo 2 del artículo 295 (actos ilegales relacionados con un arma de fuego) y del párrafo 2 del artículo 377 (hurto de documentos, timbres o sellos). Ese mismo día, el autor logró ver a un abogado.

2.8 El mismo día fue registrado el apartamento en el que vivían su ex nuera y su nieto. Asimismo, se interrogó a su ex nuera acerca del estado de salud y de la situación financiera del autor. También fue registrado el apartamento del autor sin la presencia de su abogado. Se incautaron de documentos personales, tarjetas profesionales, cartas, artículos, teléfonos móviles y documentos relacionados con la BABI. El garaje de su hijo fue asimismo objeto de registro.

Medidas restrictivas previas al juicio

2.9 El 29 de abril de 2004, tras pasar cinco días en un centro de reclusión del KGB, se entregó al autor una orden en la que se autorizaba la privación de libertad. En el párrafo 2 del artículo 295 y en el párrafo 2 del artículo 377 del Código Penal mencionados en la orden se contemplan otras medidas restrictivas previas al juicio que no conllevan la reclusión. El autor alega que, al determinar las medidas restrictivas, los investigadores del KGB² no tuvieron en cuenta las circunstancias del caso, la gravedad de la acusación, los servicios que el autor prestaba a la sociedad y al Estado, sus condiciones de salud y los llamamientos de la opinión pública en general. En el informe sobre la salud del autor, que se le facilitó al KGB, se decía que, una semana antes de ser detenido, el autor había recibido atención médica por sufrir fuertes dolores y fiebre. Se le diagnosticó una afección cardíaca y nefrológica y se recomendó que se le sometiera a tratamiento en un hospital cardiovascular por sufrir taquicardias. La petición del autor y de su abogado al Fiscal Regional de Minsk de que modificara las medidas restrictivas por motivos de salud fue desestimada. La solicitud iba acompañada de cartas de apoyo de figuras públicas.

Investigación

2.10 La investigación preliminar duró ocho meses, que el autor pasó en un centro de reclusión del KGB. Durante ese período, el autor alega que se le imputaron acusaciones falsas con el fin de prolongar su reclusión. Cuando no pudieron encontrarse pruebas, se le imputaron nuevas acusaciones. De esta forma, el 23 de septiembre de 2004, cinco meses después de su detención, se incoaron contra él las actuaciones penales que dieron lugar a su condena, si bien la orden de procesamiento no se emitió hasta el 4 de noviembre de 2004. El autor alega que su detención a partir del 26 de octubre de 2004 se debió a la necesidad de estudiar la posibilidad de incoar otro procedimiento penal contra él en virtud del párrafo 1 del artículo 377 del Código Penal en relación con el hurto del sello de la organización que presidía. En mayo y junio de 2004, se presentaron seis peticiones a la Fiscalía Regional de Minsk protestando contra su detención ilegal y contra las acusaciones que se le imputaban.

² El Organismo de Seguridad del Estado de la República de Belarús (belaruso: Камітэт дзяржаўнай бяспекі, КДБ; ruso: Комитет государственной безопасности, КГБ) es el organismo que se ocupa de la inteligencia en Belarús. Es el único organismo de inteligencia que mantuvo el nombre ruso de KGB tras la disolución de la Unión Soviética.

Asimismo se presentaron dos peticiones similares ante la Fiscalía General de Belarús. El 29 de junio de 2004, el autor escribió una carta al jefe del KGB de Belarús y al Fiscal General de Belarús en la que denunciaba la ilegalidad de su detención y las acusaciones que le imputaba el KGB. El 24 de septiembre de 2004, el abogado del autor presentó un escrito ante el Fiscal General de Minsk en el que solicitaba que se retirasen todas las acusaciones formuladas contra el autor. El escrito fue desestimado.

2.11 El autor añade que la investigación fue realizada por el Departamento del KGB de la ciudad de Minsk y de la región de Minsk, aunque, con arreglo al artículo 182 del Código de Procedimiento Penal, esta función corresponde al Ministerio del Interior.

Condiciones de la reclusión

2.12 El autor alega que, durante la reclusión previa al juicio, se le mantuvo en condiciones inhumanas y degradantes en el centro de reclusión del KGB, lo cual repercutió negativamente en su salud, como se pone de manifiesto en los informes médicos. Alega que no se siguieron las recomendaciones del cardiólogo. En agosto de 2004, se impidió al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que visitara al autor en el lugar en que estaba detenido.

2.13 El autor afirma que, durante la reclusión, estuvo en cinco celdas diferentes, ninguna de ellas mayor de 5 m². Las celdas estaban concebidas originalmente para 1 ó 2 personas, pero en realidad en ellas había 4 ó 5. No tenían ventilación artificial ni podían recibir aire fresco del exterior. Por tanto, en ellas olía a sudor, orina y excrementos. En verano, en las celdas hacía demasiado calor, por lo que los reclusos tenían que estar medio desnudos y la ropa estaba siempre mojada debido al alto nivel de humedad. En otoño, las celdas estaban frías y húmedas. No había luz natural y la iluminación la proporcionaba una única bombilla, por lo que la celda estaba siempre en semioscuridad. La luz, que no se apagaba de noche, no llegaba hasta las literas inferiores, por lo que era imposible leer o escribir, mientras que los que estaban en las literas superiores tenían dificultades para dormir. La insuficiencia de la iluminación agotaba los ojos y afectaba a la vista. Este aspecto queda documentado, al parecer, en un informe médico.

2.14 El autor alega que las comidas en el centro de reclusión eran muy escasas. En el desayuno les daban harina de avena, en la comida sopa y gachas de avena, y en la cena patatas hervidas sin pelar y arenques. Nunca había verduras, fruta ni carne. Los reclusos tenían derecho a recibir paquetes de comida de sus familiares dos veces al mes. No obstante, los paquetes eran sometidos a un estricto control. El autor alega que perdió 10 kg en seis meses. Dice que sus compañeros de celda fumaban mucho y que la administración de la prisión no hacía nada para limitar el consumo de cigarrillos ni para separar a los fumadores de los no fumadores.

2.15 Afirma que durante la detención desarrolló varias enfermedades cardiovasculares crónicas. Asimismo, se deterioró su estado nefrológico. Durante el tiempo que pasó en prisión, se le sometió a dos exámenes médicos que pusieron de manifiesto varias dolencias cardiovasculares, entre ellas arritmia, isquemia cardíaca y arterioesclerosis. En el informe del examen médico de 20 de octubre de 2004 se decía que el autor debía someterse a tratamiento en un centro médico especializado. El autor dice que se ejerció presión sobre los miembros de la comisión médica para que llegasen a la conclusión de que no existían razones médicas para ponerlo en libertad.

Juicio

2.16 El autor alega que el juicio, que duró del 23 al 30 de diciembre de 2004, no fue justo ni imparcial. Aunque se declaró que las audiencias eran públicas, de hecho se impidió que representantes de partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales estuvieran presentes en la sala. Al parecer, el edificio de los tribunales estaba rodeado por la policía, que impedía que la gente incluso se aproximase a él. El autor dice que había agentes del KGB presentes constantemente en el edificio. Dos de ellos grabaron las actuaciones judiciales. Las audiencias se celebraron en una sala pequeña con cabida únicamente para 12 personas. Alega que, durante los recesos, los agentes del KGB y el juez mantuvieron consultas sin la presencia de testigos. No se permitió que los periodistas, a los que se había autorizado a acceder a la sala a insistencia de la defensa y de los familiares, grabaran las audiencias.

2.17 El autor afirma que, durante las audiencias, los jueces manifestaron escaso interés en las alegaciones formuladas por los abogados y por el acusado. El fiscal se mostró maleducado y tendencioso y en repetidas ocasiones hizo observaciones groseras acerca del autor. El 30 de diciembre de 2004, último día del juicio, el juez se desplazó al Tribunal Regional de Minsk para recibir orientación acerca del veredicto y de la sanción. Se condenó al autor por el hurto de una computadora y otro equipo de oficina donado a la BABI por la Embajada de los Estados Unidos y se le condenó a 5 años de prisión, se le confiscaron sus bienes y se le inhabilitó para desempeñar ciertos cargos públicos durante tres años. El autor alega que la condena en virtud del párrafo 2 del artículo 210 del Código Penal es ilegal, dado que en sus actos no había elementos delictivos. Al parecer, el Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos declararon que no tenían reclamación alguna que hacer al autor ni a la organización que presidía. El tribunal, no sólo ignoró la declaración presentada por la Embajada de los Estados Unidos sobre la inexistencia de reclamación alguna, sino que alteró los hechos reales y dijo en su veredicto que el propietario de los bienes pedía la devolución del equipo. El tribunal también hizo caso omiso del protocolo de la reunión del Consejo de la BABI, en el que se estipulaba que la organización no tenía que reclamar bien alguno al autor.

2.18 El autor añade que el tribunal no tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que se encontraba en el extranjero cuando el equipo fue sacado de la oficina y que no pudo contactar con los miembros de la organización. Este hecho queda probado con los documentos que la fiscalía obtuvo del servicio de pasaportes y visados, en los que figura que el autor salió de Belarús el 25 de enero de 2003 y volvió el 17 de febrero de ese mismo año. Este hecho también fue confirmado por testigos y documentos presentados por la defensa. El autor añade que el tribunal, actuando de manera tendenciosa, concedió a estas declaraciones únicamente un reconocimiento parcial y alega que, en la sentencia, el tribunal tergiversó la lógica y el sentido de las declaraciones.

2.19 Tras el juicio, celebrado en enero de 2005, el autor fue trasladado al centro de reclusión del KGB en Minsk, en donde estuvo hasta el 3 de marzo de 2005, fecha en que se le llevó a la penitenciaría de Orsha. Las condiciones continuaron siendo las mismas (raciones de alimentos escasas, un paseo de 40 minutos al día y carencia de asistencia médica). En aquel momento, sus abogados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Regional de Minsk como resultado del cual su condena se redujo de cinco años a tres y medio.

Penitenciaría de Orsha

2.20 El autor afirma que tardaron más de un día en trasladarle, junto con otros reclusos, a Orsha. Durante el viaje, en vagones de tren en los que hacía mucho frío, los reclusos, que estaban esposados, fueron sometidos a registros e inspecciones degradantes. Una vez que llegaron a Orsha, fueron trasladados a la penitenciaría en camiones especialmente

equipados. Al llegar, se les ordenó que bajaran de los camiones y se les obligó a ponerse en cuclillas, bajar la cabeza y arrodillarse. Durante el viaje a Orsha, los guardianes le confiscaron toda la medicación, que el autor debía tomar dos veces al día, y no se la devolvieron.

2.21 Tras la llegada a la penitenciaría el 3 de marzo, el autor se dirigió a la administración y solicitó atención médica, pero no se la proporcionaron. El autor afirma que era difícil ser admitido en el hospital de la prisión, ya que sólo cinco reclusos podían estar en el hospital al mismo tiempo. Antes de ser trasladados al hospital, los reclusos tenían que hacer una larga cola para ser examinados por un médico. A veces, en el pasillo había hasta 50 reclusos de diferentes unidades.

2.22 El 4 de marzo, al autor se le cayó accidentalmente una tetera con agua hirviendo que le causó quemaduras importantes en la parte izquierda del cuerpo. Dos días después se quedó paralizado y fue llevado al hospital de la prisión. El autor alega que sufrió un derrame cerebral y que la administración de la prisión no se lo notificó a sus familiares ni a su abogado. La administración y los médicos de la prisión no hicieron nada para prestarle la asistencia necesaria ni para contactar con especialistas cardiovasculares.

2.23 El 10 de marzo de 2005, su esposa consiguió visitarle cuando estaba medio paralizado. Le devolvieron la medicación, pero no era adecuada para tratar un infarto. Pasó varias semanas sin recibir tratamiento alguno.

2.24 El 11 de marzo de 2005 presentó una queja ante la Fiscalía General en la que pedía que se adoptasen medidas en relación con la negativa de la administración de la penitenciaría de Orsha a prestarle atención médica. El mismo día, el Fiscal de Orsha visitó por fin la penitenciaría. No obstante, hasta el 14 de marzo, es decir una semana después de que el autor hubiera sufrido el derrame, no tuvo lugar la visita a la penitenciaría de una comisión médica especial. El 15 de marzo, el autor fue trasladado al hospital penitenciario central de la penitenciaría N° 1 de Minsk. En el informe del jefe del hospital de la penitenciaría, de 22 de marzo de 2005, se decía que el autor había sufrido un derrame cerebral el 7 de marzo de 2005 y se añadía que, tras él, el autor padecía esclerosis cardíaca, fibrilación, arterioesclerosis de la aorta, problemas coronarios, afección de la carótida en relación con la histona H2A, hipertensión arterial, urolitiasis, cataratas, angioesclerosis de la retina de ambos ojos y quemaduras térmicas del tercio medio y superior del antebrazo izquierdo. En el informe se refleja que el autor sufrió un ataque cardíaco entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, cuando se encontraba en prisión. El autor afirma que el centro médico de la penitenciaría no certificó este hecho y que no recibió el tratamiento necesario en el hospital de la prisión.

Condiciones en la penitenciaría N° 1

2.25 El autor alega que la administración de la penitenciaría N° 1 no adoptó medidas especiales pese a la gravedad de su estado. Las condiciones y las raciones de alimentos en la penitenciaría eran escasamente suficientes para asegurar su recuperación. Tenía derecho a dos visitas anuales de tres días y tres de 90 minutos de sus familiares y únicamente a tres paquetes de alimentos al año. Al parecer, se le denegó la solicitud de recibir paquetes adicionales.

2.26 El autor añade que, en enero de 2006, la temperatura de las celdas no superaba los 10°C y la del hospital los 16°C.

2.27 Alega que desde el 26 de julio de 2005 tenía derecho a libertad condicional, con arreglo al Código Penal de Belarús, al tener más de 60 años y haber cumplido la mitad de la condena. No obstante, se le denegó por "no haber entrado en la senda de la corrección".

2.28 En noviembre de 2005 se le declaró persona con discapacidad del segundo grupo y, por tanto, con derecho a ser puesto en libertad por motivos de salud. Se denegó una solicitud que presentó el 24 de septiembre de 2005 en la que pedía su puesta en libertad por motivos de salud. Como pura formalidad se le transfirió a un régimen menos estricto que permitía otras dos visitas cortas y dos visitas largas al año. No obstante, las modificaciones correspondientes a ese régimen se quedaron en gran medida en el papel. No fue hasta marzo de 2006 cuando se permitió que lo examinara un médico de fuera de la prisión. El 14 de abril de 2006 se le puso en libertad condicional tras la celebración de las elecciones presidenciales del 19 de marzo en Belarús.

2.29 El autor añade que, después de su detención, se puso en marcha una campaña pública para lograr su puesta en libertad. Las organizaciones no gubernamentales convocaron manifestaciones masivas contra su encarcelamiento y condena. Todas las manifestaciones fueron disueltas por las autoridades y muchos activistas fueron perseguidos por participar en ellas. La investigación y el juicio fueron seguidos por representantes de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y organizaciones internacionales, que manifestaron, en numerosas declaraciones, su condena a las medidas adoptadas por las autoridades de Belarús y pusieron de manifiesto la parcialidad del sistema de justicia. También pidieron la inmediata puesta en libertad del autor y el fin del hostigamiento político contra él.

La denuncia

3.1 El autor alega que se infringieron los artículos 7 y 10, ya que se le mantuvo en condiciones inhumanas, rigurosas y degradantes en el centro de reclusión del KGB, durante su traslado a la penitenciaría N° 8 de Orsha y en las penitenciarías N° 8 y N° 1. Afirma que esas condiciones repercutieron negativamente en su salud, aspecto que quedó documentado en los informes médicos. Afirma que sufrió un derrame cerebral en la penitenciaría tras la negativa de la administración a proporcionarle la medicación necesaria y que no recibió tratamiento durante una semana después de sufrir el derrame.

3.2 Alega que se infringió el artículo 9, ya que las acusaciones que se le imputaron, la medida restrictiva previa al juicio que se le aplicó y la continua prolongación de su encarcelamiento fueron ilícitos. Afirma que, al adoptarse la decisión sobre la medida de restricción previa al juicio, no se tuvieron en cuenta las circunstancias del caso, la gravedad de la acusación, los servicios que había prestado a la sociedad y al Estado, su estado de salud ni los llamamientos de la opinión pública en general. Afirma también que se le llevó a las instalaciones del KGB sin orden previa de la fiscalía ni de ningún otro organismo. No se presentó acusación alguna contra él durante cinco días. La investigación preliminar duró ocho meses, tiempo que pasó en el centro de detención del KGB. Durante este período se le imputaron acusaciones falsas para prolongar su reclusión. El 23 de septiembre de 2004, cinco meses después de su detención, se inició un procedimiento penal que dio lugar a su condena, si bien no se presentó una acusación formal hasta el 4 de noviembre de 2004. El autor alega que lo tuvieron detenido desde el 26 de octubre de 2004 para estudiar la posibilidad de incoar otro procedimiento penal.

3.3 El autor sostiene que se infringió el artículo 14, ya que no contó con asistencia letrada durante los interrogatorios iniciales. Además, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia. Alega que el interrogatorio se grabó con una cámara oculta. Posteriormente, se mostraron algunas secuencias del interrogatorio en la televisión de Belarús acompañadas de comentarios falsos y degradantes sobre el autor. Añade que, durante el proceso judicial, los jueces siguieron instrucciones de las autoridades. Las audiencias no fueron totalmente públicas y estuvieron vigiladas de cerca por los servicios especiales, que grabaron todo el juicio. Los jueces interpretaron de manera tendenciosa las pruebas reunidas en la investigación, así como las que les proporcionaron los testigos y la defensa.

3.4 El autor afirma que se infringió el artículo 17 dado que, al ser inicialmente un testigo, todos los registros de su apartamento y la confiscación de sus bienes fueron ilegales.

3.5 Alega que se infringieron los artículos 19 y 22 ya que, detrás de su detención y condena, estaba su oposición a la trayectoria económica y política del Presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko. Durante los dos años previos a su detención, tanto él como la organización que presidía habían recibido presiones y sufrido persecuciones de las autoridades.

3.6 El autor no facilita ningún detalle sobre su reclamación en virtud del artículo 15 del Pacto.

Observaciones del Estado parte

4.1 El 7 de junio de 2007, el Estado parte informó de que el autor había sido condenado en aplicación del párrafo 4 del artículo 210 del Código Penal por el hurto de 40 piezas de equipo proporcionado para su utilización temporal por la Embajada de los Estados Unidos. El autor no inscribió debidamente el equipo en el Departamento de Asuntos Humanitarios, que forma parte de la Oficina del Presidente. El equipo no figuraba en los registros financieros de la organización, se encontraba en un apartamento alquilado y posteriormente fue trasladado en el automóvil del hijo del autor a un garaje.

4.2 El Estado parte alega que el autor fue absuelto por falta de pruebas de la acusación de posesión ilícita de armas de fuego, con arreglo al párrafo 2 del artículo 295 del Código Penal.

4.3 La condena del autor se redujo a tres años y seis meses. El Estado parte afirma que el juicio fue público y se desarrolló con arreglo a la legislación procesal penal. Las alegaciones del autor respecto del comportamiento inadecuado del fiscal y del juez no han sido confirmadas.

4.4 La afirmación del autor de que la Embajada de los Estados Unidos no presentó ninguna reclamación respecto del equipo contradice las pruebas incluidas en el expediente y, en particular, las declaraciones de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Así pues, la decisión del tribunal se basó en las pruebas examinadas y analizadas en la sentencia.

4.5 En cuanto a la alegación del autor de que funcionarios del KGB se incautaron ilegalmente de su dinero, el Estado parte aduce que se descubrió que 49.000 dólares de los 90.900 incautados eran falsos. El autor reconoció que el dinero le pertenecía pero se negó a hacer comentario alguno sobre las conclusiones de los expertos. En la investigación no se llegó a la conclusión de que el autor hubiese participado en el delito y, por tanto, se suspendió al no poderse encontrar al culpable.

4.6 Tras la llegada del autor a Orsha, se le sometió a un examen médico y se le prescribió un tratamiento. Familiares cercanos del autor presentaron una reclamación contra las personas que consideraron responsables de haber ocasionado un perjuicio a su salud. En relación con la reclamación, la fiscalía ordenó una investigación de las causas del derrame cerebral sufrido por el autor. La investigación no puso de manifiesto que hubiese habido ningún incumplimiento de las obligaciones profesionales del personal médico de la penitenciaría N° 8. El 15 de marzo de 2005, el autor fue trasladado al departamento neurológico del hospital de la penitenciaría N° 1, dedicado a reclusos con diagnóstico de infarto cerebral. El autor siguió el tratamiento prescrito por un especialista del Instituto de Investigaciones Científicas en Neurología y Neurocirugía y por un cardiólogo. Asimismo, el autor fue examinado en el Centro de Investigaciones Científicas en Cardiología. El

hospital de la penitenciaría le facilitó la medicación, y la que no pudo obtenerse en el hospital se la facilitaron familiares del autor.

4.7 El 22 de marzo de 2005, el autor manifestó que no tenía reclamación alguna contra la administración de la penitenciaría N° 1 respecto de las condiciones de su reclusión y que estaba satisfecho con el trato recibido. Debido a su estado de salud el autor fue retenido en la penitenciaría N° 1 hasta su puesta en libertad.

4.8 Se redujo la sentencia del autor en un año en aplicación de la amnistía con motivo del 60° aniversario de la victoria en la segunda guerra mundial.

4.9 Respecto de la reclamación del autor de que el juicio no fue justo, que se vulneraron los derechos del acusado, y que se infringió la presunción de inocencia, el Estado parte alega que los requisitos de esos principios están reflejados en la legislación nacional. La sentencia del autor se revisó en casación y a niveles de supervisión, incluido el Tribunal Supremo. Se estimó que la sentencia se ajustaba a derecho y estaba justificada. El Estado parte alega que no se vulneraron derechos del acusado que pudieran dar lugar a la anulación de la sentencia. El tribunal tuvo en cuenta la presunción de inocencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal.

Comentarios del autor

5.1 El 7 de enero de 2008, el autor manifestó que las observaciones del Estado parte no se correspondían con los hechos y las pruebas de su caso. Reitera sus alegaciones anteriores y añade que los hechos afirmados por el Estado parte son arbitrarios y están distorsionados pese a las pruebas documentales. Afirma que durante el juicio su abogado y él mismo pidieron al juez que sustituyera al fiscal y que observaron que el juez se comunicaba con los agentes del KGB. No obstante, no se adoptó medida alguna respecto de estas solicitudes y observaciones. Añade que no se tuvieron en cuenta ninguna de sus reclamaciones y solicitudes durante la detención previa al juicio.

5.2 El autor rechaza la observación del Estado parte de que la sentencia del tribunal estaba justificada. Afirma que entre la documentación del caso no había ninguna prueba de sus intenciones. Hace referencia a las observaciones del Estado parte de que la Embajada de los Estados Unidos había reclamado los bienes y alega que en el expediente del caso figura una carta de la Embajada y del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la que confirman que no tienen reclamación alguna respecto de él personalmente ni respecto de su organización. El tribunal ignoró esta prueba. Añade que la acusación llamó como testigo a un técnico que trabajaba en la Embajada de los Estados Unidos, un nacional de Belarús que estaba sometido a presión por el KGB. No se citó ante el tribunal a ningún funcionario de la Embajada de los Estados Unidos de nacionalidad estadounidense.

5.3 El autor añade que la observación del Estado parte de que se había realizado un examen médico al autor tras su llegada a la penitenciaría es falsa. Reitera que únicamente se le trasladó al pabellón médico tras el derrame cerebral que sufrió el 4 de marzo de 2005, y no el 7 de marzo de 2005 como dice el Estado parte. Dice que se le trasladó a la prisión del hospital el 15 de marzo de 2005 y que, de haber recibido tratamiento a tiempo, se hubiesen evitado las complicaciones que surgieron.

Comentarios adicionales de las partes

6.1 El 2 de mayo de 2008, el Estado parte reiteró sus afirmaciones anteriores y añadió que las alegaciones del autor de que el comportamiento de la fiscalía fue inadecuado y que hubo comunicación entre el juez y agentes de inteligencia durante el juicio no habían sido confirmadas. Las pruebas se evaluaron de manera correcta con arreglo al artículo 105 del Código de Procedimiento Penal.

6.2 La declaración del autor de que la Embajada de los Estados Unidos no reclamó ningún equipo contradice las pruebas del caso, y en particular los testimonios de los testigos.

6.3 El Estado parte alega que, con arreglo a la legislación, el equipo debía haber estado recogido en el informe financiero de la organización como "alquilado". No obstante, en el informe correspondiente a 2002-2003 presentado a la Oficina de Impuestos no se indicaba que la BABI hubiese recibido el equipo. El autor había sido presidente de la BABI desde el 9 de octubre de 2001. El 13 de octubre de 2003 dejó de pertenecer a la organización. Este hecho fue confirmado por testigos. Las alegaciones del autor de que se había ampliado el acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos no habían sido confirmadas.

6.4 El Estado parte afirma que en el expediente figuran pruebas que indican que la Embajada de los Estados Unidos pidió la devolución del equipo. No obstante, el autor facilitó información falsa de que el equipo se había instalado en centros regionales. En realidad, el equipo se encontró en la residencia del autor y en un garaje al que había sido trasladado siguiendo sus instrucciones. Así pues, la culpabilidad del autor quedó demostrada por las pruebas examinadas durante el proceso y que se analizaron en la sentencia.

7.1 El 12 de septiembre de 2008, el autor reiteró sus alegaciones anteriores y añadió que, durante el juicio, los testigos no dijeron que él se hubiese apropiado indebidamente del equipo. Se limitaron a confirmar que éste estaba instalado en las oficinas de la BABI. El autor añade que todos los testigos manifestaron las razones de que no se hubiese inscrito el equipo, que se debía principalmente a los obstáculos que habían puesto las autoridades para inscribir las oficinas regionales de la BABI, lo cual obligó a la organización a dejar su oficina central en Minsk. Por tanto, el autor alega que el tribunal distorsionó la lógica y el sentido de los testimonios, citó sólo parte de ellos y los parafraseó. Además, alega que el hecho de que el equipo no estuviese inscrito con arreglo a la legislación debía examinarse a la luz del procedimiento administrativo y no en un procedimiento penal.

7.2 En cuanto a las observaciones del Estado parte de que el autor ya no pertenecía a la BABI, alega que el tribunal se contradijo, ya que primero lo condenó en su calidad de jefe de la organización y al mismo tiempo dijo que no pertenecía a ella. El autor alega que no dejó de formar parte de la organización pese a los intentos del Ministerio de Justicia, que bloqueó las actividades de ésta. Todas estas maniobras tuvieron lugar entre seis y ocho meses antes de su detención.

8.1 El 26 de marzo de 2009, el Estado parte dijo que, con arreglo al artículo 287 del Código de Procedimiento Penal, los presentes en la audiencia de un tribunal tienen derecho a recibir una grabación o un escrito con las actas del proceso. Las fotografías y las grabaciones de vídeo pueden hacerse si lo autorizan el juez y las partes. Por tanto, las declaraciones del autor acerca de la prohibición de que se hiciesen grabaciones, tanto si se refería a grabaciones de audio o a reproducciones por escrito, eran falsas.

8.2 Las afirmaciones del autor sobre la comunicación entre el juez y los agentes de inteligencia no eran fundadas. Las oficinas del Ministerio del Interior tenían la obligación de mantener el orden público. Dado que el caso había atraído la atención de los medios de comunicación y de la comunidad diplomática, como el propio autor confirmó, los agentes de orden público tomaron todas las medidas necesarias para mantener el orden en la sala. La restricción del número de asistentes a la audiencia se debió al limitado espacio disponible en la sala del tribunal.

8.3 En cuanto a la reclamación del autor de que se le devolviera su dinero, el Estado parte reitera que 49.000 dólares de los 91.000 eran falsos. El resto se incautó en el marco de las medidas de confiscación de bienes previstas en la sentencia.

8.4 Respecto de la alegación del autor de que se habían vulnerado sus derechos durante el traslado a la penitenciaría, el Estado parte alega que éste duró cinco horas, de conformidad con las disposiciones del Ministerio del Interior. El traslado se llevó a cabo en tren, en vagones especiales equipados con celdas con tres hileras de camas. El sistema de calefacción de los vagones se ajusta a las normas generales. Teniendo en cuenta estas circunstancias, se denegó la realización de una investigación penal por no existir elementos delictivos en los actos del personal que acompañó al autor durante el traslado.

8.5 Con arreglo a las disposiciones del Ministerio del Interior, no se permite llevar medicación durante el traslado y esas mismas disposiciones establecen que los condenados que son trasladados de una prisión a otra deben ser sometidos a un registro personal y de sus pertenencias.

8.6 Según las disposiciones internas de la penitenciaría, tras la llegada al penal, todos los reclusos son enviados durante 14 días a celdas de cuarentena aisladas en las que se les somete a examen médico. En la primera semana, un médico realiza un examen exhaustivo para determinar si el recluso tiene alguna enfermedad y evaluar sus condiciones de salud.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

9.1 Antes de examinar cualquier reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

9.2 Conforme al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

9.3 El Comité observa que el Estado parte no ha planteado ninguna cuestión en relación con el agotamiento de los recursos internos.

9.4 El Comité toma nota de las alegaciones del autor, en relación con los artículos 19 y 22, de que la oposición del autor a la trayectoria política y económica del Presidente Aleksandr Lukashenko fue la razón subyacente de su detención y condena. No obstante, el Comité considera que el autor no facilitó suficientes detalles para respaldarlas. Por tanto, concluye que las alegaciones no se han sustanciado suficientemente a los efectos de determinar su admisibilidad y las declara inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

9.5 En cuanto a la presunta violación del artículo 15, el Comité considera que el autor no expuso las razones por las que, a su juicio, se había infringido esa disposición. Por tanto, el Comité considera que esa alegación no se ha sustanciado suficientemente y la declara inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

9.6 El Comité toma nota de las alegaciones formuladas por el autor en relación con el artículo 17 acerca del registro de su vivienda y la de sus familiares, así como de sus pertenencias personales, de la intervención de su teléfono, la vigilancia de su automóvil y la confiscación de su dinero y sus documentos. No obstante, el Comité considera que estas alegaciones deberían examinarse en conexión con las formuladas en relación con el artículo 14, ya que están relacionadas con el proceso penal incoado contra él.

9.7 En cuanto a las reclamaciones relacionadas con los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto, el Comité considera que se han sustanciado suficientemente a los efectos de su admisibilidad. Por tanto, las declara admisibles.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

10.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

10.2 El Comité toma nota de la reclamación del autor en relación con los artículos 7 y 10 del Pacto de que durante su detención se le mantuvo en condiciones inhumanas, estrictas y degradantes en el centro de reclusión del KGB, y posteriormente en las penitenciarías N° 8 de Orsha y N° 1 de Minsk, así como que se le sometió a tratos inhumanos durante su traslado desde el centro de detención a la penitenciaría de Orsha. El autor alegó que esas condiciones y ese trato repercutieron negativamente en su salud y le ocasionaron un derrame cerebral cuando se encontraba en la penitenciaría al negarse la administración del centro a proporcionarle la medicación necesaria. Alegó, asimismo, que la administración no le facilitó tratamiento durante una semana después de sufrir el derrame.

10.3 El Estado parte rebatió parte de estas alegaciones manifestando que se sometió al autor a un examen médico y se le prescribió un tratamiento. Dijo que en la investigación realizada tras presentar el autor la reclamación no se llegó a la conclusión de que hubiese habido violación alguna del deber profesional por parte del personal médico de la penitenciaría N° 8 y que se trasladó al autor a la penitenciaría N° 1 debido a su estado de salud. No obstante, el Estado parte no formuló ningún comentario sobre el deterioro de la salud del autor mientras se encontraba detenido ni sobre el hecho de que no se le hubiera facilitado la medicación necesaria ni tratamiento inmediato después de sufrir el derrame. El Comité observa que los Estados partes están obligados a cumplir determinadas normas mínimas durante la detención, y que éstas incluyen la prestación de atención médica y de tratamiento a los reclusos enfermos, de conformidad con el artículo 22 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Del relato del autor y de los informes médicos facilitados se desprende que aquél tenía dolores y que no obtuvo la medicación necesaria ni recibió el tratamiento médico adecuado de las autoridades de la prisión. Dado que el autor permaneció en prisión durante más de un año tras sufrir el derrame y que tuvo graves problemas de salud, al no disponer de ninguna otra información el Comité considera que el autor fue víctima de una violación del artículo 7 y del artículo 10, párrafo 1, del Pacto.

10.4 El Comité toma nota de la reclamación del autor en relación con el artículo 9 de que las acusaciones que se le imputaron, las medidas restrictivas previas al juicio adoptadas y la continua prolongación de su encarcelamiento fueron ilícitos. La causa penal que dio lugar a su condena se inició cinco meses después de su detención. El Comité toma nota también de la reclamación del autor de que fue llevado al KGB sin que mediara orden alguna de la fiscalía ni de ningún otro organismo, que no se le imputó ninguna acusación durante cinco días y que se le impidió contar con asistencia letrada durante los interrogatorios iniciales. El autor también alegó que, durante los ocho meses que estuvo detenido en el centro del KGB, se le imputaron diversas acusaciones falsas a fin de prolongar su reclusión. El Estado parte se limitó a manifestar que no se había vulnerado ningún derecho del acusado que pudiera dar lugar a la anulación del juicio. En los antecedentes sobre la redacción del párrafo 1 del artículo 9 se confirma que "arbitrariedad" no equivale a "ilegalidad", sino que debe interpretarse de manera más amplia que incluya elementos de inadecuación, injusticia e imprevisibilidad. Ello quiere decir, entre otras cosas, que la reclusión tras la detención no sólo debe ser legal, sino razonable en toda circunstancia. Además, la reclusión debe ser necesaria en toda circunstancia para, por ejemplo, evitar la huida, la injerencia en las pruebas o la reincidencia en el delito. El Estado parte no ha demostrado que estos factores estuvieran presentes en el asunto en cuestión³. Por tanto, dado que no dispone de ninguna

³ Comunicación N° 305/1988, *Alphen c. los Países Bajos*, dictamen aprobado el 23 de julio de 1990, párr. 5.8.

otra información, el Comité llega a la conclusión de que ha habido una violación del artículo 9 del Pacto.

10.5 El Comité toma nota de las reclamaciones del autor de que el tribunal no fue objetivo ni imparcial ya que los jueces seguían instrucciones de las autoridades; las audiencias no eran totalmente públicas y eran objeto de una estrecha vigilancia por parte de los servicios especiales, que grabaron todo el juicio; y los jueces interpretaron de manera tendenciosa las pruebas reunidas en la investigación, así como las declaraciones de los testigos y del acusado. El Estado parte se limitó a manifestar que el juicio fue público y se desarrolló con arreglo a la legislación procesal penal y que no se habían confirmado las alegaciones del autor de que el fiscal y el juez tuvieron un comportamiento inapropiado. El Comité observa el destacado perfil del autor y recuerda su jurisprudencia de que los tribunales deben facilitar instalaciones adecuadas para que asistan las personas del público interesadas, dentro de unos límites razonables, teniendo en cuenta, por ejemplo, el posible interés público que suscite la causa, la duración de la vista oral y el momento en que se haya solicitado oficialmente la publicidad de la vista⁴. También observa que el Estado parte no expuso razón alguna de las medidas adoptadas para dar cabida al público interesado teniendo en cuenta que el autor era una figura pública. El Comité toma nota además de las alegaciones del autor en relación con el registro de su vivienda y la de sus familiares, así como de sus pertenencias personales, la intervención de su teléfono, la vigilancia de su automóvil y la confiscación de su dinero y sus documentos. Dado que el Estado parte no formuló comentario alguno para rebatir las alegaciones del autor, el Comité concluye que los hechos alegados constituyen una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

10.6 En cuanto a las alegaciones de que se infringió el párrafo 2 del artículo 14, el Comité toma nota de la reclamación del autor de que se violó su derecho a la presunción de inocencia, ya que se emitieron varias secuencias del interrogatorio en la televisión de Belarús con comentarios falsos y degradantes sobre el autor en los que se daba a entender que éste era culpable. El autor afirmó que la televisión pública de Belarús había publicado información distorsionada aun antes de que concluyera la investigación. El Estado parte no rebatió estas acusaciones. El Comité recuerda que el Pacto garantiza el derecho del acusado a la presunción de inocencia hasta que su culpabilidad sea demostrada por un tribunal competente. El hecho de que, en este asunto, los medios de comunicación del Estado presentaran al autor como culpable antes de que concluyera el juicio constituye en sí mismo una violación del párrafo 2 del artículo 14 del Pacto.

11. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera de los hechos presentados ante él se desprende que ha habido una violación por el Estado parte de los artículos 7, 9, 10, párrafo 1, y 14, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

12. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, que incluya el pago de una indemnización adecuada y el inicio de un procedimiento penal para determinar la responsabilidad por los malos tratos de que fue víctima el Sr. Marinich, de conformidad con el artículo 7 del Pacto. El Estado parte estará también obligado a impedir que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

⁴ Comunicación N° 215/1986, *van Meurs c. los Países Bajos*, dictamen aprobado el 13 de julio de 1990, párr. 6.2.

13. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]
